ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y EFECTOS SOCIO-AMBIENTALES COMO HECHO REGIONAL EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA

Introducción.

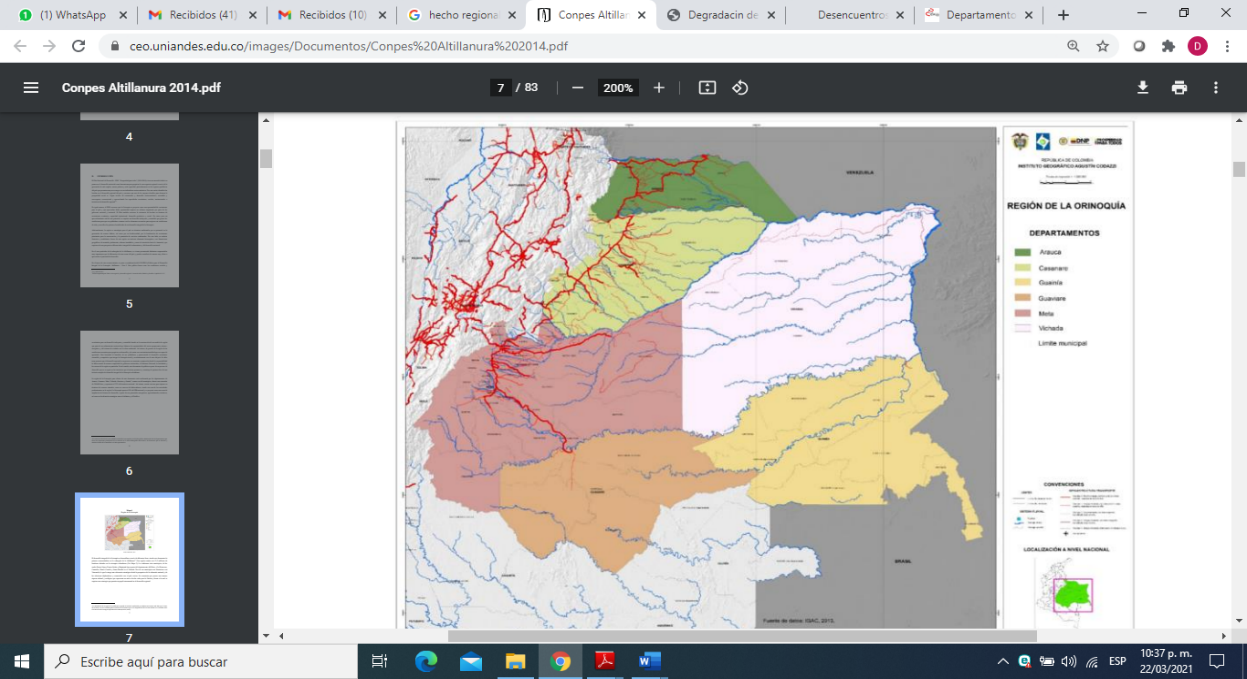
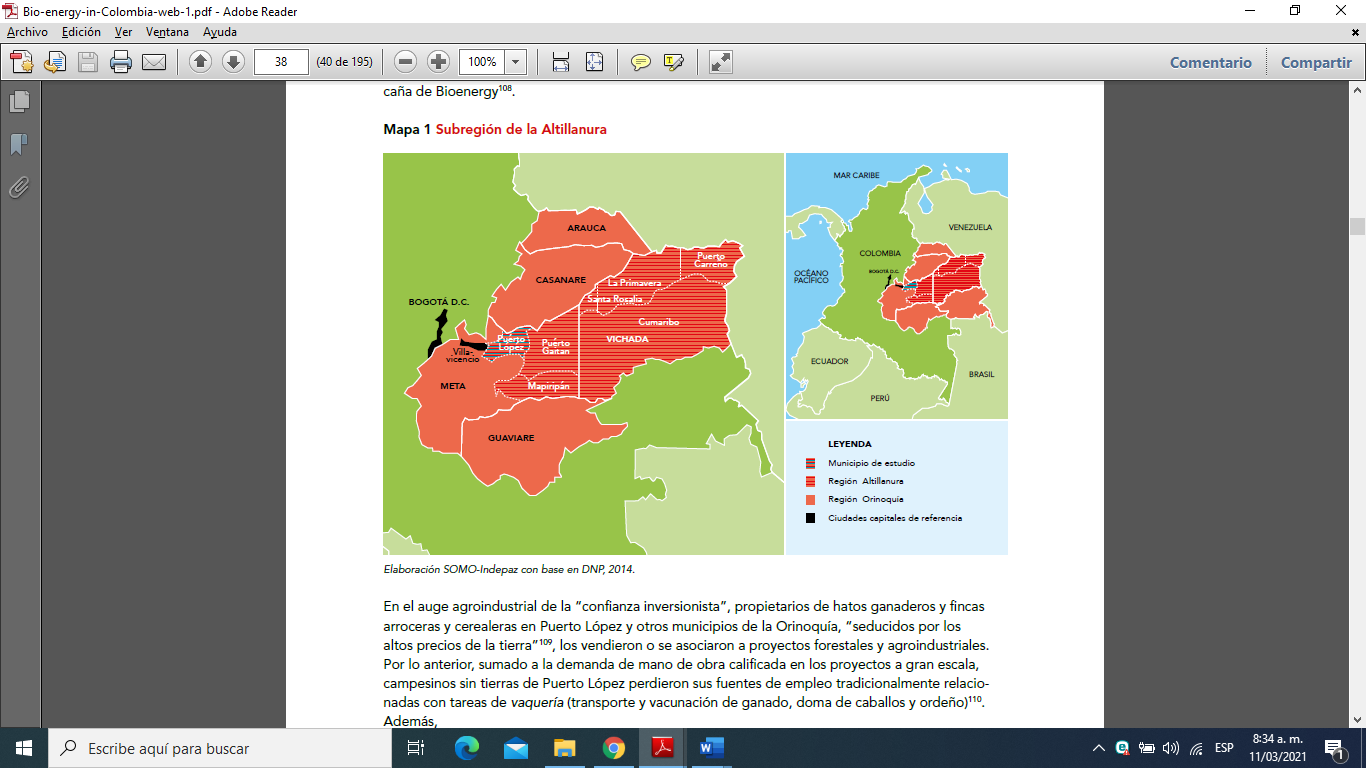
Una dura situación socio-ambiental se vive actualmente en la región de la Orinoquia, específicamente en la sub-región de la altillanura por el desarrollo de sistemas productivos como la ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito y acaparamientos de tierras, en los departamentos del Meta (municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripan), y el Vichada (municipios de La Primavera, Cumaribo, Santa Rosalía y Puerto Carreño). La Altillanura, cuenta con 13,5 millones de hectáreas, de las cuales se pueden cultivar 4,3 millones. Actualmente, solo 200 mil son productivas; por ello es considerada la gran “despensa agrícola de Colombia” con extensos cultivos de maíz, soya, arroz, palma de aceite y pastos a gran escala, entre otros (CEO 2017). A pesar de tener bastante extensión de tierras, su alto índice de ácidos y aluminio limita la agricultura generando baja infraestructura y poca asistencia técnica para la producción (Torres-Mora 2020). Esta zona de la región Orinoquia demuestra un gran potencial siendo catalogada como “la última gran frontera del país, con tierras atractivas para la inversión privada y la implementación de estrategias productivas bajo esquemas asociativos” (ANT, 2018, pp, 68).

Como lo señalan las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH 2018) la altillanura es territorio indígena donde ocupan el 60% del territorio reconocido como “territorios colectivos”. Pese a esto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sostiene qué debido a las condiciones de la región, el desarrollo depende de la atracción de inversiones tanto extranjeras como nacionales a través del aseguramiento de la tenencia de la tierra para actividades extractivistas (Torres-Mora 2020) lo cual, pone al Meta y Vichada según la FAO, en los departamentos con mayor concentración de tierra durante los últimos años con proyectos de transformación del uso del suelo por el posicionamiento de economías de escala (ANT 2018).

De acuerdo con el contexto anterior, el siguiente articulo analiza los procesos de tenencia de la propiedad que ocurren en la altillanura a través del hecho regional de acaparamiento de tierras identificados en los últimos años, evidenciando problemas, conflictos y transformaciones territoriales desde los factores sociales, ambientales, económicos y políticos generado por modelos y visiones de diferentes actores como el estado, grupos armados y asociaciones campesinas.

1.1 Identificación y descripción del hecho regional

La altillanura en la región de la Orinoquia (véase mapa 1) cuenta con grandes extensiones de sabanas que sobrepasan los más de 13 millones de hectáreas distribuidos en 7 municipios (véase mapa 2), la que hoy por hoy, probablemente sea el sitio con la mayor dinámica de transformación en toda la zona oriental del país, que van desde las actividades ilegales de cultivos de coca (30 años atrás) hasta lo que vemos actualmente como proyectos agroindustriales, ganadería extensiva y actividades extractivistas (Arias 2010). Dentro de estas lógicas actualmente se presenta en el territorio una expansión de la frontera agrícola y pecuaria sobre los diferentes ecosistemas, generando cambios en el uso del suelo y pérdidas en extensiones naturales como consecuencia del postconflicto (Gráfico 1) (Anexos). Igualmente, se evidencia actividades poco sostenibles como resultado de estos procesos, ya que se necesitan grandes áreas de terreno para el sostenimiento de las familias campesinas lo cual demanda gran cantidad de recursos renovables y económicos, ya que en la creación de la UAF[[1]](#footnote-1) determinaron un promedio de 838 Ha para la altillanura lo cual limita las actividades agrícolas (CONPES 2014).

 Mapa 1. Región de la Orinoquia Mapa 2. Sub-región de la Altillanura.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP (2014)

De acuerdo a lo ya mencionado, la altillanura está vinculada en el marco del ordenamiento territorial y social a limitaciones en la recuperación de la tierra y a la informalidad en su tenencia. Lo que ha generado inseguridad en los derechos de la propiedad y adicionalmente carencia de institucionalidad en la protección de baldíos[[2]](#footnote-2) en la zona. Esto implica una relación directa con la fiebre y poder por la tierra, ya que al ser un territorio con gran potencial y capacidad productiva en sus suelos y a la vez el gran rezago que existe en términos de actualización y formación catastral, genera que actores con capacidad financiera y otros con tenencia del poder tengan acceso a esos territorios. En este sentido, es lógico entender el acaparamiento como hecho regional que vincula dinámicas sociales, políticas y ecológicas en un territorio tan productivo y multicultural como lo es la altillanura.

2. Análisis del hecho regional.

A continuación, se describen los hechos que enmarcan las sinergias, tensiones y conflictos existentes entre actores que representan estas dimensiones y finalmente se destacan las potencialidades y oportunidades que se generan en el territorio.

2.1 Normatividad

Haciendo un chequeo de la normatividad colombiana enfocada en el área de estudio, el acaparamiento de tierras y las actividades productivas en la Altillanura han sido adecuadas bajo la orientación de políticas públicas en los gobiernos nacionales de los últimos años, a continuación, se ilustra los principales hechos normativos por los cuales Colombia ha optado en el análisis de alternativas en función del ordenamiento territorial con el propósito de lograr una ruralidad sin el fenómeno de acaparamiento de tierras.

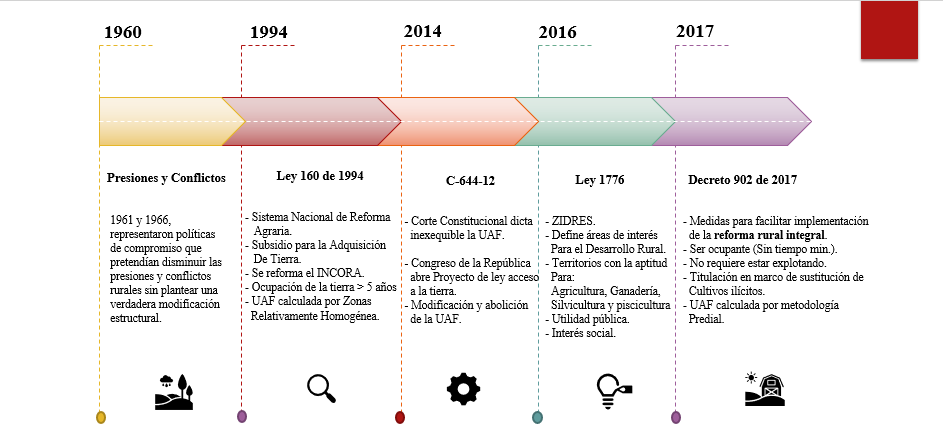


Ilustración 1. Línea de tiempo análisis normatividad en Colombia, Fuente: Elaboración propia.

Las políticas de compromiso que pretendían disminuir las presiones y conflictos rurales sin plantear una verdadera modificación estructural iniciaron en el País a mediados de los Sesenta sin una mayor relevancia, por el contrario, los conflictos y tensiones persistían. En víspera de un mejor porvenir, se dio el primer planteamiento mediante la incidencia de la Ley 160 de 1994[[3]](#footnote-3) con el criterio de la UAF generando un conflicto en el proceso de entrega de títulos de propiedad en zonas baldías, así mismo, la aplicación de este criterio nunca ha sido clara en la región ya que, por un lado, se encuentran los campesinos quienes consideran que la expansión de la frontera agrícola debe beneficiarlos a ellos, pero difícilmente podrán producir más del 10% de la tierra donde por ejemplo en Mapiripan son cerca de 1.360 Ha lo cual no podrán tener ejercicios productivos importantes, y por otro lado, están los que consideran que la altillanura debe ser punta de lanza para el desarrollo agroindustrial en el país, la UAF es un impedimento para la adquisición de tierra por parte de inversionistas con capacidad de producir cultivos extensivos. A raíz de la deficiencia de la UAF la corte constitucional en el 2012 (Corte Constitucional, C-644-12, 2012) declaro inexequible esta norma y en el año 2014 el Congreso de la Republica generó un debate sobre el “Proyecto de Ley de acceso a la tierra” donde uno de los temas tratados fue la modificación o abolición de la UAF (Duarte 2016). Posteriormente en 2016 se expide la Ley 1776[[4]](#footnote-4) con el fin de estimular las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (ZIDRES) fundamentales para permitir el desarrollo productivo de la región ya que generan seguridad en las inversiones, atraen inversión privada y contemplan incentivos en los esquemas asociativos (PMO 2016).

De acuerdo a lo anterior, el MADR especifica tres aspectos importantes en la creación de las ZIDRES: i) las propiedades no favorecen a los campesinos en los proyectos de productivos por la baja fertilidad, por lo tanto, tienen que vender sus propiedades; ii) más del 50% de los baldíos fueron vendidos por beneficiarios en Colombia, esto contraria los fines de la reforma agraria; iii) grandes extensiones de la altillanura se han otorgado a una misma familia lo que impacta negativamente los propósito de la reforma agraria (Torres-Mora 2020). Bajo estas circunstancias la UPRA[[5]](#footnote-5) identifico las zonas donde se podrían ejecutar las ZIDRES donde predomina los departamentos del Meta y Vichada (Gráfico 2) (Anexos).

Por último y no menos importante, se identifica el decreto ley 902 del 2017 por medio del cual se han adoptado nuevas medidas con el fin de facilitar la implementación de una reforma rural integra puntualmente el procedimiento para el acceso y formalización de la tierra (Ley 902, 2017).

2.2 Relaciones e Interdependencias

La deforestación ha sido un hecho y un fenómeno que ha vinculado en años anteriores dinámicas sociales, políticas, económicas y ambientales en relación con la tenencia y concentración de la tierra. Según investigaciones del CONPES 3797 la región está vinculada a un contexto histórico de violencia y despojo de tierras durante los siguientes periodos: i) década de los 80 llegan los grandes hacendados -Víctor carranza y socios- provenientes del piedemonte llanero apropiándose de tierras en Puerto López y Puerto Gaitán y por otro lado, narcotraficantes que con las ganancias de la actividad cocalera compraron tierras en la región para dedicarlas a la ganadería extensiva; ii) en la década de los 90: la llegada del paramilitarismo y sus alianzas representaron el control de la región, promoviendo el despojo de tierras a campesinos, masacres, asesinatos colectivos y otros hechos violentos, pero el mismo tiempo, descubren el método de fertilización que regula la acidez del suelo y permite que sea más productivo lo que generó el interés por parte del sector empresarial generando otra actividad económica como lo fue la extracción de petróleo principalmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán; iii) a principios del siglo XXI hubo una transformación del modelo ganadero a otras actividades como agricultura de plantación, a la producción porcina y la explotación petrolera, la cual trajo inversionistas que impulsaron proyectos de exportación y cultivos de gran extensión (Duarte 2016). Por ello, la altillanura está enmarcada a los hechos de colonización y concentración de tierra por narcotraficantes y terratenientes llevando así, a los campesinos a la supervivencia basada en la agricultura de pan coger, ganadería de compañía, jornaleo de fincas y empleos temporales en las petroleras.

Las condiciones económicas generadoras de la deforestación están vinculadas a un contexto geográfico y de infraestructura de los municipios pertenecientes a la altillanura, básicamente por como se desarrollo la presencia de grupos armados en relación con los cultivos ilícitos (Grafico 3, Anexos) lo cuales tuvieron el control político durante muchos años consecuencia de la disputa entre diferentes actores. Igualmente, la deforestación en la Orinoquia esta relacionada al acaparamiento de tierra por parte de grandes empresarios con grandes proyectos productivos (Grafico 4, Anexos) donde uno de los principales es Pacific Rubiales entre otros grandes como: i) La Fazenda, con mas de 13.000 ha de cultivos de soya, maíz y producción avícola y porcina; ii) grupo brasilero Mónica Colombia con la plantación mas grande de caucho de Colombia; iii) Mavalle, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. El crecimiento de este sector con la presencia de estas empresas y plantaciones forestales juegan un papel importante en los campesinos de estas zonas, ya que muchos de ellos han dejado sus tierras por falta de garantías en el campo, donde día a día es más difícil producir.

2.3 Tensiones y conflictos

Partiendo del reconocimiento que se le otorga a la sub-región de la altillanura como sujeto para la determinación de políticas públicas en marco del ordenamiento territorial en Colombia, parece ser esta sub-región el foco territorial con menos capacidad de decisión y acción sobre los factores para el control del suelo y la ruralidad. Tal como se describe en la Tabla 1. Identificación de conflictos y tensiones en la Altillanura (Anexos), la falta de clarificación legal sobre las formas de regulación en los territorios que conforman esta zona del País, no solo puede recaer en la competencia de estos territorios, sino que a la vez existe una alta tensión con las instituciones nacionales que reglamentan e intervienen en la dinámica de compra masivas de tierras por parte de empresarios nacionales y extranjeros, son unos de los conflictos y tensiones que más predominan en esta sub-región.

En primera instancia, en el caso puntual de la formalización masiva de terrenos, las tensiones entre los grandes hacendados y el ente regulador se torna cada vez mayor, así lo advirtió la procuraduría haciendo seguimiento al cumplimiento de una serie de órdenes en el marco de la Sentencia T-488 de 2014 en donde la procuraduría identifica la entrega masiva de terrenos a terceros con fines de enriquecimiento económico y afectación ambiental bajo la figura de prescripción adquisitiva[[6]](#footnote-6). No obstante, se ordenó desarrollar un proceso de clarificación de la propiedad por esta vía viciada para recuperar e investigar se existe o han existido estructuras delictivas al interior de la rama judicial y las gobernaciones departamentales.

Ahora bien, existen tensiones y conflictos que se enlazan a los planos de ordenamiento territorial y los demás instrumentos que se enmarcan en la planificación del territorio. De acuerdo a esto, a la fecha no es claro cómo se está llevando a cabo la elaboración de los Planes básicos (PBOT) y los Esquemas de ordenamiento territorial (EOT), ni mucho menos si existe o no la participación con las comunidades tal como lo resalta y exige la Ley 388. Tal vez la conclusión más grave que se identifica, es que en Colombia no hay una entidad ni una institucionalidad capaz de resolver el problema, un ejemplo es, las definiciones normativas del suelo en planes y esquemas desactualizados con más de veinte años, son motivo para que el evento se torne complejo si el generar medidas de mediano y largo plazo para reducir normativamente la adquisición masiva de terrenos se enmarca en una norma local que no considera este como un problema principal de los municipios que conforman esta región de la altillanura.

Un reciente comunicado de prensa sentenciado por la Procuraduría resalta que en Colombia las órdenes estructurales dadas no han sido cumplidas, ni las actuaciones emprendidas en su cumplimiento han resultado eficaces. El diagnóstico señala que, por un lado, no había información actualizada y completa sobre administración y adjudicación de baldíos. Pero sí hay una excesiva concentración de las tierras.

Según cifras reportadas por la Agencia Nacional de Tierras en 2019, hay 29.077 predios identificados en los que se encuentran inscrita prescripción adquisitiva de dominio sobre presuntos bienes baldíos de la nación. De ellos, 1.411 tienen áreas superiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) que es la que se entrega a campesinos en el proceso regular de adjudicación de baldíos (El Espectador, Redacción Judicial, 2021).

Finalmente, el ente regulador en este caso la ANT, tampoco ha sido eficiente respecto a una de sus misiones: los Planes de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR)[[7]](#footnote-7). A corte de abril de 2020, había 41 de los cuales 14 fueron suspendidos y solo uno estaba en marcha en Ovejas (Sucre). Esto, no ha permitido la identificación de los bienes baldíos como tampoco ha logrado la ejecución de los procesos agrarios asociados a dicha labor.

En relación con la tensión y los conflictos producto de la excesiva concentración de la tierra, la reflexión resulta superficial cuando la premisa de ello es la ausencia de ejecución de los procedimientos previsto por la ley para erradicar este fenómeno de acaparamiento. La debilidad institucional actual impide el cumplimiento de la normatividad. Los territorios continúan con la carga de la desigualdad histórica en materia del acceso a la tierra y las grandes empresas continúan con un enriquecimiento descontrolado con adquisiciones de tierras a gran escala con fines privados comerciales e industriales, dejando a un lado la identidad del territorio (J. A. Serrano, 2017).

2.4 Potencialidades

Se considera que, en términos productivos, la implementación del desarrollo de nuevas tecnologías y el manejo del uso del suelo en la altillanura genera sistemas de producción sostenibles y eficientes. Dentro del marco del convenio de Cooperación Técnica y Científica MADR-CIAT y el Ministerio de Agricultura de Colombia promueven la “construcción de la capa arable” (Figura 1) (Anexos), donde el objetivo es transformar los suelos de baja productividad en suelos altamente productivos a través de procesos físicos y químicos con un enfoque el cual permita enfrentar la actual problemática en los suelos de la altillanura. Esto a la final va a repercutir en el aumento productivo del suelo y el desarrollo económico de la región diversificando las actividades agropecuarias en cultivos como soya, maíz, caña, yuca y otros cultivos menores (Tabla 2) (Anexos) para que sean sostenibles y rentables. Esto genera que las familias campesinas pueden tener más producción con menos área de cultivo, e igualmente disminuir las actividades extractivistas que generen problemas socio-ambientales.

Por otra parte, las estrategias y planes de acción -Fase I- del CONPES 2014 propone varios objetivos y metas los cuales mejoran el ordenamiento territorial con condiciones propicias para el uso del suelo de manera sostenible:

* Se propone ordenar el territorio socialmente para aprovechar el potencial agropecuario ya que son generadoras de empleo y riqueza de una manera ambientalmente adecuada considerando la fragilidad de los ecosistemas.
* La MADR y UPRA formularan políticas de acceso a tierras bajo un esquema de ordenamiento social promoviendo la asociatividad en derechos de uso y propiedad de la tierra.
* En temas de catastro el IGAC realizará la actualización en los municipios de la altillanura lo cual contribuirá a una mayor seguridad jurídica y precisión en tierras baldías para facilitar la restitución de tierras despojadas.
* En temas ambientales, el MADS en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales CAR revisaran lo lineamientos para garantizar la conservación de los ecosistemas estratégicos de la altillanura y el proceso de formulación de los POMCAS a la incorporación de determinantes ambientales en los POT, PBOT, EOT de los municipios en jurisdicción.
* Fortalecimiento de capacidades institucionales para que los POT, PBOT y EOT sean generadores de recursos de inversión en los municipios.

Del mismo modo y resaltando las incidencias desde la institucionalidad, en Colombia a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según el estudio más reciente publicado por (P. Alvares Roa, 2015) conforme al acaparamiento de tierras como fenómeno mundial, se adelantan gestiones de acercamiento entre las gobernaciones, los entes reguladores y las empresas privadas con fines comerciales para despertar el interés de propios y privados caracterizados por proyectos productivos con más de 10 mil hectáreas en la sub-región de la Altillanura y que manejan activos forestales por más de US$11.000 millones, lo que infiere la apropiación del recurso sin dejar a un lado el sentido de pertenencia del territorio.

Para concluir, en países como Colombia la discusión es central en la medida que los gobiernos promueven un escenario propicio para el desarrollo de grandes agroindustrias. No obstante, como se logra observar en el desarrollo de este texto, la dinámica de inversión y de acaparamiento de tierras en Colombia ha estado en un constante ascenso, esta tendencia proyecta cifras elevadas en los próximos años, escenario que obliga a las administraciones locales y nacionales ejecutar políticas en pro de la formalización de la propiedad y dinamización del mercado de tierras, entre otras cosas, a causa de la constante demanda por tierras que se desarrolla a nivel mundial, la oferta de alimentos y no menos importante el control de los recursos naturales.

Bibliografía.

ANT (2018). Agencia nacional de tierras. Estructura agraria y corrupción burocrática: RETOS PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DE LA NACIÓN. 2018. Bogotá, Colombia.

Arias, W. (2010). Así se roban las tierras en Colombia, Bogotá, Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, CNMH, Bogotá.

CEO (2017). Centro de estudio de la Orinoquia. LA ALTILLANURA PUEDE SER LÍDER EN DESARROLLO DEL PAÍS POR SU ADELANTO AGRÍCOLA. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

CONPES 3797 (2014). Departamento Nacional de Planeación, Políticas para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura FASE I. Bogotá, Colombia.

Decreto Ley 902 de 29 de mayo de 2017, Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integra contemplada en el acuerdo final de materia de tierras. Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá, Colombia.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014). Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia (CONPES) Documento 3797. Recuperado de <https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Conpes%20Altillanura%202014.pdf>

Duarte, C. (2016). Desencuentros territoriales: Caracterización de los conflictos en las regiones de la Altillanura, Putumayo y Montes de María, edición académica. — Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016. 378 páginas.

El Espectador, 16 de marzo de 2021, El crudo informe de la Procuraduría sobre el despelote en el manejo de terrenos baldíos. Redacción judicial. Bogotá, Colombia.

Gómez, P, (2015). VICHADA: ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN LA ÚLTIMA FRONTERA AGRARIA (tesis de maestría). Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.

Jose Antonio Serrano, octubre 2018. La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia: Obstáculo principal para una paz duradera y democrática. Universidad Complutense.

Paula Álvarez Roa, febrero 12 de 2015, Acaparamiento de tierras, fenómeno mundial con presencia en Colombia. Corporación grupo semillas. Colombia.

Plan de desarrollo rural integral Zidres (2018). Equipo Zidres de la UPRA, Bogotá, Colombia

Plan maestro de la Orinoquia (2016). Departamento nacional de planeación, Bogotá, Colombia.

Rivas, L. Hoyos, P. Amézquita, E. Molina, D (2004). Manejo y uso de los suelos de la Altillanura Colombiana. Análisis económico de una estrategia para su conservación y mejoramiento. Proyecto de Evaluación de Impacto de Suelos. Cali, Colombia.

Torres-Mora, A. G. (2020). Acaparamiento de tierras y acumulación por desposesión en Colombia. El caso de las Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). FORUM. Revista Departamento Ciencia Política, 17, 7-42. <https://doi.org/10.15446/frdcp.n17.79676>

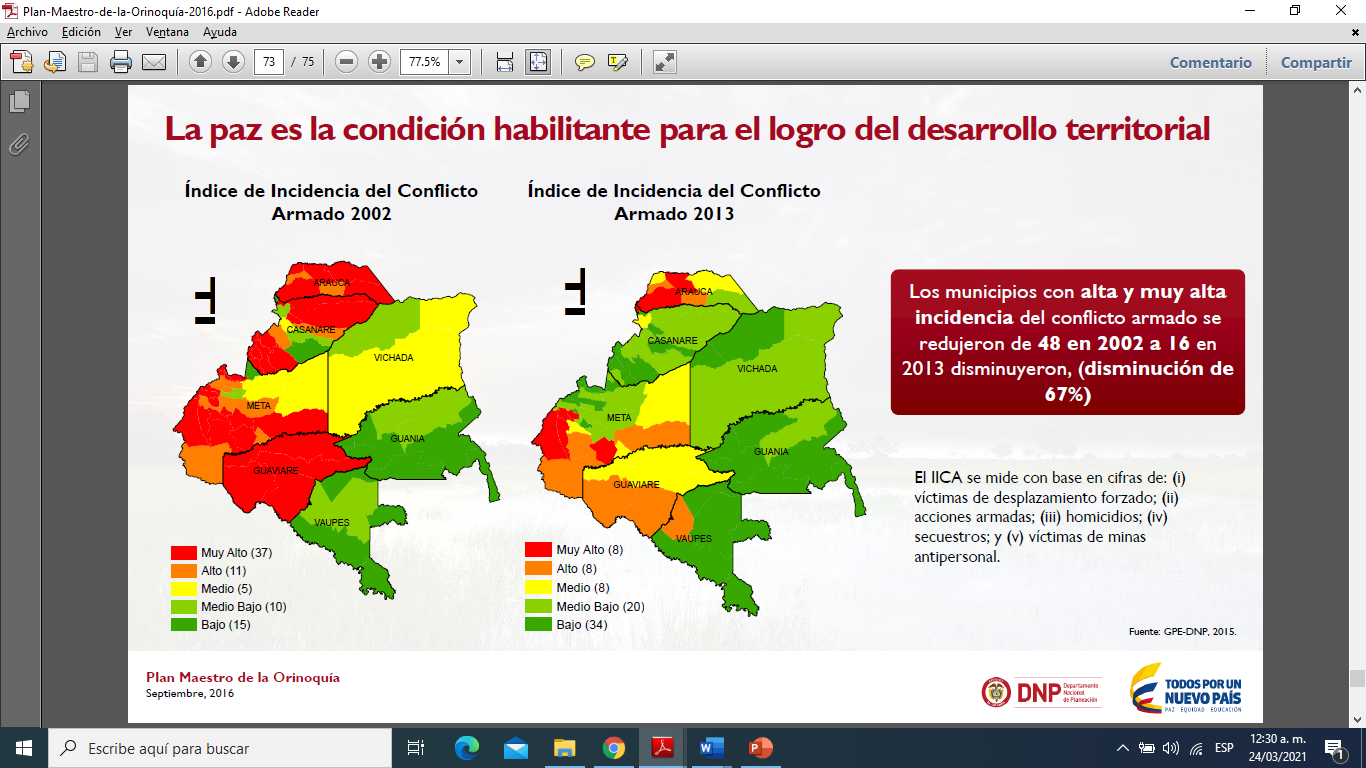
Anexos.

Tabla 1. Identificación de conflictos y tensiones en la Altillanura.

|  |  |
| --- | --- |
| ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN LA ALTILLANURA | |
| CONFLICTOS INSTITUCIONALES | CONFLICTOS SOCIOECONÓMICOS |
| Conflictos entre el modelo de desarrollo y los diagnósticos de los diferentes instrumentos de ordenamiento tales como EOT, PBOT y POT producto de discordia en las visiones y enfoques por las distintas competencias y/o por implementación de los mismos. | Restricciones en los diagnósticos de los Esquemas territoriales generadas por la ausencia de infraestructura, fallas en las inversiones, implementaciones inapropiadas, implica altos costos y tiempos, lo cual perjudica de manera directa el campesino y su sustentabilidad. |
| Diferencias normativas en la identificación de zonas de intervención. Ejemplo de ello: Decreto 3600 identifica las UPR como determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo VS ley 388 "Ley de desarrollo territorial" señala al municipio como el ente regulador para la zonificación de las unidades, lo que en evidencia resalta tensiones y conflictos institucionales | Conflictos en los territorios por uso del suelo, tierras de baja fertilidad, campesinos que no pueden llevar a cabo proyectos productivos por restricciones en inversión, es causal para que la productividad de la tierra no sea suficiente, producto de ello, deben vender sus tierras para obtener recursos, generando inestabilidad en su lugar de residencia, patrimonial y laboral. |
| Discrepancia entre instrumentos de planificación rural con enfoque social VS conceptos técnicos plasmados e identificados en los diagnósticos de uso del suelo en los esquemas de ordenamiento obsoletos sin un enfoque social acorde al territorio. | Se identifican adjudicaciones de grandes extensiones de terrenos baldíos, que de manera individual no superan la medida máxima permitida en la zona para las UAF, a varios integrantes de una misma familia, desvirtuándose el objetivo de estos programas. |
| Modelos de negocio no establecen mecanismos de asociación con los campesinos, de esta manera los habitantes nativos del territorio terminan desarraigados; absorbidos como asalariados, o sin fuente de ingreso. (Torres-Mora, A. G. 2020) | La mecanización pesada, de alta tecnología y menos fuerza de trabajo, se relaciona con monocultivos. Mientras 100 hectáreas ocupadas por agricultura familiar generan 35 trabajos, los monocultivos de palma aceitera apenas generan 10 y de soya 0,5. |
| Conflictos y tensiones entre comunidades campesinas y los entes reguladores de baldíos por la no inclusión social en el marco de los megaproyectos agroindustriales que se proyectan y ejecutan en la región. | Se prioriza por parte de los Estados el control de amplias extensiones de tierra a grupos empresariales, ofreciendo beneficios de costo, adquisición de derechos o impositivos, en el marco de la búsqueda de innovación tecnológica y/o cultivos a gran escala. |

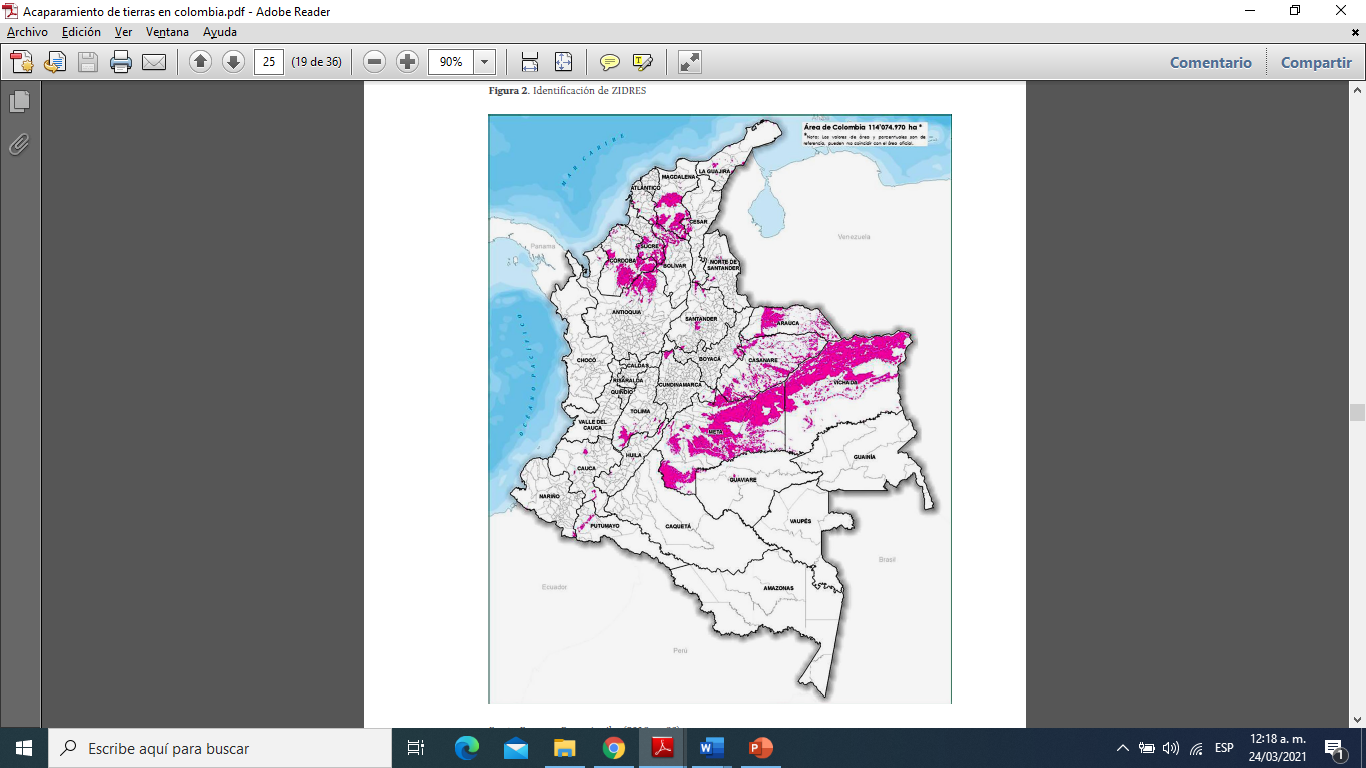
Fuente: Elaboración propia, Análisis información recopilada.

Gráfico 1. Índice de incidencia del conflicto armado del 2002-2013



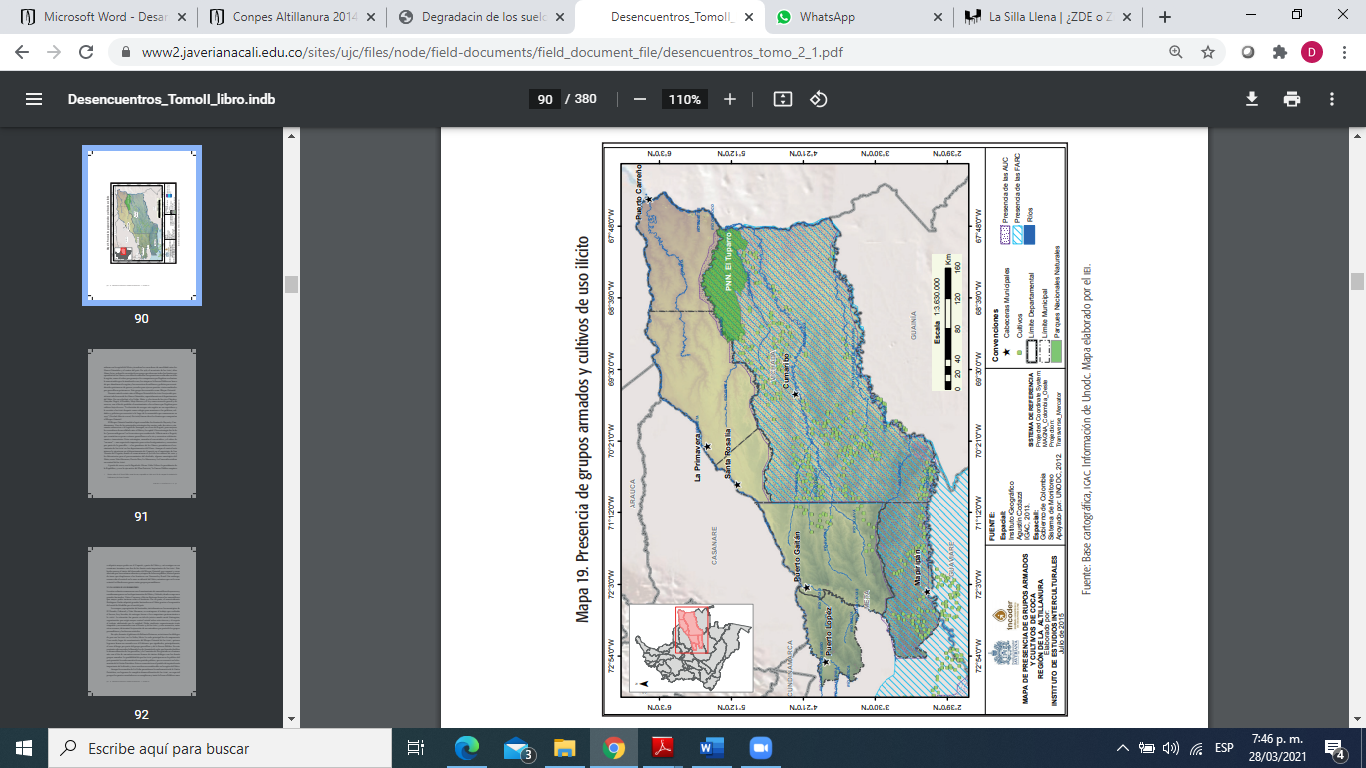
Fuente: Plan Maestro de la Orinoquia (2016)

Gráfico 2. Identificación de las ZIDRES



Fuente: Torres-Mora (2020, p, 25)

Gráfico 3. Presencia de grupos armados y cultivos de uso ilícito.



Fuente: Duarte (2016, pp, 90).

Gráfico 4. Resguardos indígenas y áreas de exploración y explotación de hidrocarburos

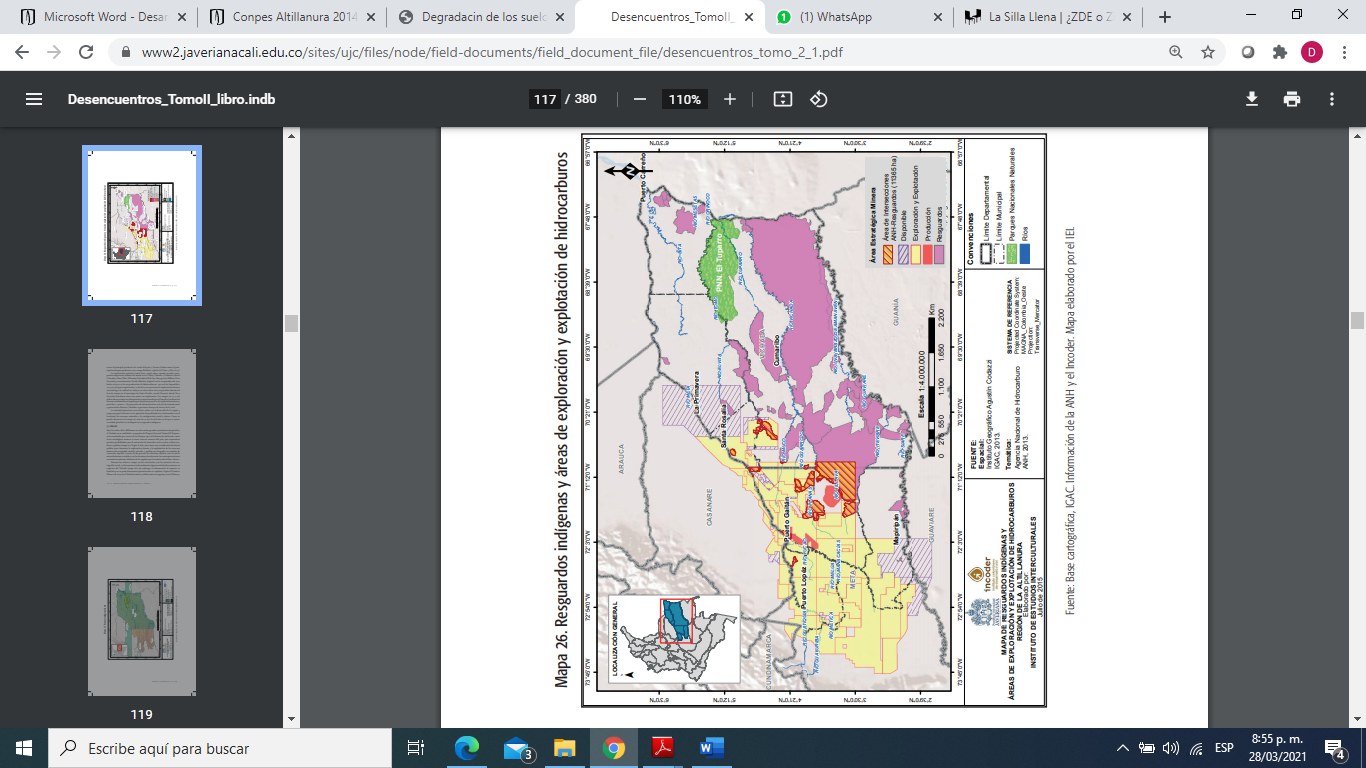
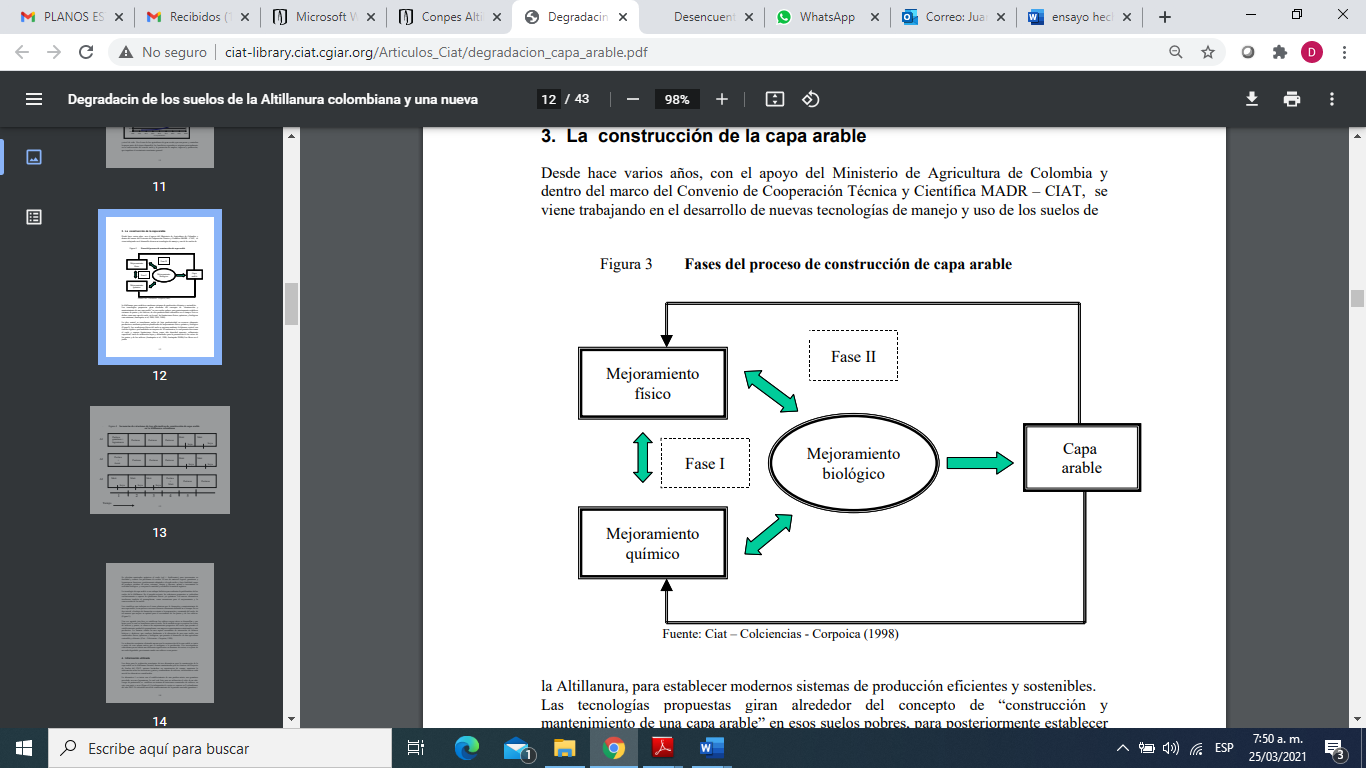
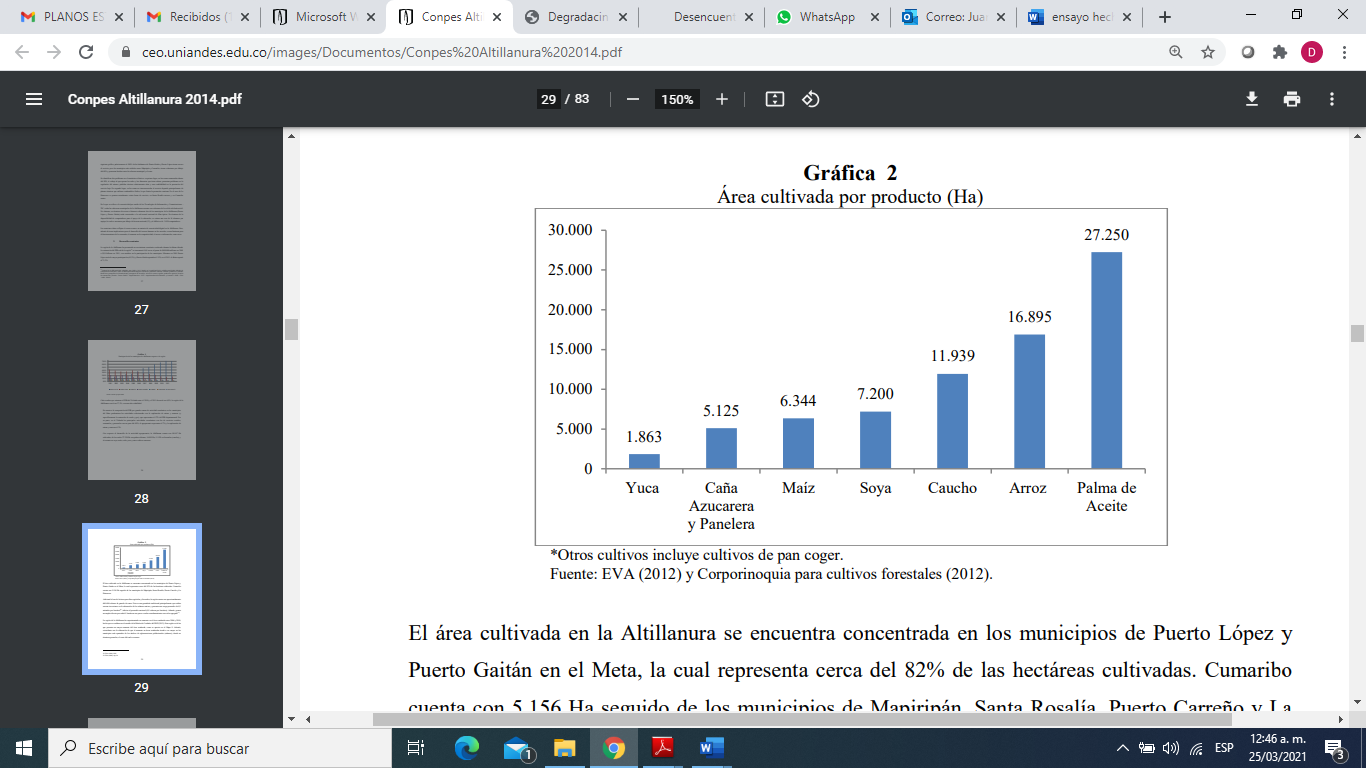


Figura 1. Fases del proceso de construcción de capa arable



Fuente: Manejo y uso de los suelos de la Altillanura Colombiana (2004, pp, 12).

Tabla 2. Área cultivada por producto (Ha)



Fuente: CONPES 2014

1. Unidad agrícola familiar, es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos mensuales vigentes. [↑](#footnote-ref-1)
2. Son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ley 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. [↑](#footnote-ref-3)
4. Esta define las áreas de interés para el desarrollo rural y económico como territorios con aptitud para la agricultura, ganadería, silvicultura y piscicultura, y que también tienen utilidad pública e interés social. [↑](#footnote-ref-4)
5. Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria. [↑](#footnote-ref-5)
6. Consiste en que un juez entrega la propiedad de un terreno a quien lo habita y explota luego de que su dueño legal se desentiende del mismo. En estos procesos, La adquisición requiere asimismo posesión no interrumpida por el término que fije la ley, pero no exige título alguno, y en ella se presume de derecho la buena fe, lo cual quiere decir que no puede desvirtuarse (CC-466-14). [↑](#footnote-ref-6)
7. Buscan el desarrollo de programas para organizar la distribución equitativa y acceso a la tierra rural, la regularización de la propiedad y la consolidación del mercado de tierras rurales en función de las necesidades territoriales (Documento Conceptual POSPR, ANT). [↑](#footnote-ref-7)